

Naturaleza de los ficheros de las fundaciones del sector público estatal. Informe 66/2003

La consulta plantea la naturaleza de los ficheros de la fundación consultante, atendiendo a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, lo que exige delimitar el criterio que diferencia los ficheros de titularidad pública y los de titularidad privada.

Si bien la Ley Orgánica 15/1999 delimita en su articulado el régimen de los ficheros de titularidad pública y privada, no establece un concepto de los mismos. Por esta razón, la delimitación deberá fundarse en los criterios que determinan la naturaleza jurídico-pública o jurídico-privada del responsable del fichero.

Esta conclusión se alcanza atendiendo a las peculiaridades establecidas para el régimen de los ficheros de titularidad pública, toda vez que los mismos únicamente podrían ser constituidos en caso de que se desarrollen como consecuencia del ejercicio de una competencia administrativa, tal y como se desprende del artículo 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, que permite la cesión entre Administraciones Públicas cuando la misma se funde en el ejercicio de unas mismas competencias. En este mismo sentido, el artículo 20 de la Ley exige que los ficheros se encuentren sometidos a la tutela de una Administración con potestad para dictar la correspondiente Disposición de carácter general de creación del fichero.

Por tanto, considera esta Agencia de Protección de Datos que la delimitación del régimen aplicable a los ficheros de titularidad pública y privada deberá fundarse en un doble criterio : por una parte el responsable del fichero deberá ser una Administración Pública y por otra, en los supuestos que pudieran plantear una mayor complejidad, sería necesario que el fichero sea creado como consecuencia del ejercicio de potestades públicas.

Atendidos estos criterios, sería preciso delimitar el concepto de Administración Pública como responsable de los ficheros de titularidad pública.

Pues bien, tratándose de una fundación constituida por una Administración Pública, los artículos 44 a 46 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de fundaciones regulan las fundaciones del sector público estatal, estableciendo el artículo 46.1.a) como premisa fundamental que dichas fundaciones "no podrán ejercer potestades públicas", gozando asimismo de personalidad jurídica propia y distinta de la Administración territorial que hubiera promovido su constitución.

Consecuencia de lo anterior será la inaplicación a las fundaciones del sector público estatal, entre las que se encuentra la consultante, de las normas contenidas en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, salvo en lo referente al respeto de los principios de publicidad y concurrencia (Disposición Adicional Sexta de la Ley de Contratos), no quedando sometidos el personal de dichas empresas al régimen de los funcionarios públicos al no ser de aplicación

a las mismas lo establecido en la Ley 30/1984, ni siendo susceptibles sus actos de recurso contencioso-administrativo, ni tan siquiera de reclamación previa al ejercicio de acciones civiles o laborales, ni gozando sus actos de la ejecutividad reconocida para los actos de la Administración Pública.

En virtud de todo ello, dado que, con independencia del origen del capital dotacional de la fundación, las actividades de la misma, que se describen en el apartado II de la consulta, no implicaran en modo alguno el ejercicio de potestades administrativas ni de ninguna de las "competencias" a las que se refiere el artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, los ficheros o tratamientos realizados por la entidad consultante deberán en todo caso ser considerados como de titularidad privada, lo que implicará la necesidad de proceder a la notificación del tratamiento en los términos exigidos por el artículo 26 de la Ley Orgánica sin que sea de aplicación a la misma la exigencia de adopción de una disposición general de creación de sus ficheros, prevista en el artículo 20 del citado texto legal.